

“Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto”



JOSÉ GARCÍA MONTALVO,  
catedrático de Economía  
de la Universitat Pompeu Fabra

| X @UPFBarcelona |

## Pensiones: una bomba de relojería con mecanismo retardado

“Es difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”. Esta vieja broma entre economistas refleja con bastante exactitud la enorme complejidad de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto. No obstante, en España los datos actuales son claros. El gasto total de pensiones en España fue de 13.455,61 millones de euros en febrero de 2025, lo que supone un aumento del 6,22% anual. El déficit contributivo, la forma más adecuada de calcular el déficit que generan las pensiones en las cuentas públicas, se sitúa en casi 30.000 millones de euros impulsado por el crecimiento de los gastos por el reciente brote de inflación y la indexación de las pensiones a la inflación.

Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto. Vayamos por partes. En primer lugar, esta aproximación no parece la más adecuada teniendo en cuenta que la previsión de gastos es más sencilla que la previsión de ingresos, lo que genera un riesgo significativo de insuficiencia. Los gastos, asociada con la jubilación masiva de los “baby boomers” y la evolución de sus salarios, son más previsibles que los ingresos contributivos, que dependen de la evolución de la economía fundamentalmente asociada a la evolución futura de la productividad y la variación en la tasa de afiliación, ligada en gran parte a la inmigración. Baste recordar que el 42,3% de los 501.551 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2024 eran extranjeros. Las previsiones de variaciones vegetativas, basadas en tasas de fecundidad y mortalidad, son mucho más sencillas que las previsiones de migrantes o evolución futura de la productividad. De hecho, los jubilados de aquí a 30 años ya han nacido mientras que es muy difícil prever cuantos inmigrantes nuevos habrá en 30 años. Un ejemplo de esta dificultad se puede encontrar en las estimaciones de la AIREF, sin duda los cálculos más fundamentados sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. La AIREF calcula una entrada de 235.000 inmigrantes cada año entre 2020 y 2050 y unos 339.000 entre 2051 y 2070. Sin embargo, en 2022 llegaron a España 727.005 inmigrantes, mientras en 2023 sumaron 642.296 persona.

Un segundo elemento que define el énfasis en los ingresos en lugar de los gastos es el mecanismo de garantía de la sostenibilidad. Mientras el factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2023 y fue derogado, proponía disminuir la cuantía de la pensión de jubilación a medida que aumentaba la expectativa de vida de cada jubilado, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional intenta que los jóvenes no vean reducidas sus pen-

siones a partir de “repartir de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones” con una cotización adicional finalista que se destinaría a cubrir las desviaciones del nivel de gasto.

¿Funcionará la reciente reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Según la AIREF el impacto de las reformas del sistema público de pensiones aprobadas desde 2021 a 2023 supondrá un incremento del gasto en 2050 de 2,4 puntos porcentuales del PIB (por revaloración de las pensiones con el PIB, eliminación del factor de sostenibilidad, jubilación anticipada, incentivos a la jubilación tardía, cómputo de años de cálculo de la pensión inicial y evolución de pensión máxima frente a las bases máximas de cotización), mientras los ingresos (por el Mecanismo de Equidad Generacional, reforma de cotizaciones de autónomos, evolución bases máximas de cotización y tasa de solidaridad) solo incrementarán 1,3 puntos del PIB. Por tanto, la estimación de déficit generado por estas medidas es de un incremento de 1,1 puntos del PIB. A partir de un escenario base macroeconómico y demográfico, la AIREF calcula que el gasto en pensiones alcanzará un máximo del 14,8% del PIB en 2049 para las pensiones del Sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo las pensiones no contributivas y las clases pasivas.

Esta situación es particularmente preocupante teniendo en cuenta los niveles de deuda alcanzados por el sector público español y la aprobación del nuevo marco fiscal europeo que pretende garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sin tener en cuenta la aplicación de las reglas fiscales, la AIREF estima un déficit público creciente desde 2026 hasta un máximo del 8,1% en 2055, y una deuda en 2070 que alcanzaría el 186% del PIB en el escenario base.

Es evidente la influencia de la economía política de este problema. La Seguridad Social abona pensiones a 9,3 millones de votantes, lo que convierte a este grupo en un colectivo de especial interés para los partidos políticos. Esto significa que las reformas normalmente consisten en pegar una patada adelante para no ahuyentar al electorado. Esta situación genera un claro agravio intergeneracional. Mientras se sigue acumulando deuda para pagar las pensiones actuales, que tendrán que pagar los jóvenes, los cálculos del Banco de España indican que un pensionista actual recibe un 74% más de lo que ha contribuido y FEDEA estima que los pensionistas actuales cobran durante una media de 21 años cuando las aportaciones permiten financiar solo 16 años. Mientras se realizan transferencias de recursos públicos para cubrir el pago de las pensiones no se invierten suficientes recursos públicos para políticas de innovación y aumento de la productividad que podrían aumentar los salarios de los jóvenes, o ayudas sociales para un colectivo que tiene enormes problemas para pagar una vivienda en alquiler. En estas circunstancias no extraña que la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años haya caído 8,6 puntos porcentuales entre 2008 y 2024 mientras que la tasa entre los jóvenes de 16 a 29 años ha aumentado en 3,6 puntos, y ya está 3,8 puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años. España no es país para jóvenes.

‘Avales para  
entradas’

